

Un Estado para la sociedad civil *

Marco Aurélio Nogueira

Por motivos no siempre claros, pero que indudablemente se pusieron en evidencia rápidamente en años recientes, el terreno de las relaciones entre los problemas del desarrollo y las propuestas de reforma y rediseño del Estado se presenta bastante complejo en la actualidad.

Se podría inclusive decir que existe una cierta inquietud en este terreno, derivada en gran medida de un triple agotamiento. Ante todo, se agotó el modelo de desarrollo que impulsó el capitalismo en el curso de los dos últimos siglos: agresivo, depredador de la naturaleza, impulsor de la producción intensiva de bienes de consumo superfluos, basado en la subordinación de la ciencia y de la tecnología a los dictámenes de la producción mercantil, crónicamente incapaz de producir, junto con el progreso técnico y con la superproducción de bienes, patrones superiores de vida colectiva, de trabajo y de distribución de la renta. Se agotó también el modelo neoliberal con el que se intentó, desde los años setenta en adelante, responder a la crisis del Estado y reponer la centralidad del mercado, a partir de políticas de desregulación y de ajustes de clara orientación monetarista. Y se agotó, finalmente, por haber alcanzado su explicitación plena, la crisis de la izquierda, que, bien o mal, acompañó las vicisitudes del neoliberalismo, recibió el impacto de los cambios estructurales que afectaron a las sociedades contemporáneas y sintió los efectos de la disgregación del sistema socialista del Este europeo.

Hoy, desde varias perspectivas en todo el mundo y de distintas posiciones del espectro político-ideológico, se tornan visibles los síntomas de este triple agotamiento. Se trata de algo todavía impreciso y sin rumbo claro, muy concentrado en la preocupación por retomar un protagonismo socialdemócrata (la “tercera vía”) y en esfuerzos de reinvención que incluyen antiguas alineaciones partidistas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales e instituciones gubernamentales. Pero lo suficientemente fuerte como para indicar que parece estar en marcha una especie de reversión en lo que tiene que ver con la movilización social así como con el campo político cultural más específicamente delimitado por la izquierda.

Victorias de la realidad

De unos años para acá se multiplicaron las evidencias de que algo está trepidando bajo la coraza de protección del neoliberalismo y del mundo globalizado. El escenario sigue marcado por la incertidumbre. Pero existe como un atisbo de luz en el horizonte, por el que se insinúa una lectura del futuro inmediato. Lo que antes era consenso ya no lo es más. Lo que antes era solemnemente ignorado (como es el caso de la exclusión), hoy es motivo de preocupación y se agiganta en la conciencia colectiva. De pronto, se empieza a registrar un tono diferente en los discursos proferidos por portavoces insospechables. De un énfasis exclusivo y casi religioso en los efectos positivos del ajuste neoliberal emprendido por distintos países (incluyendo el Brasil), se pasó a admitir la existencia de efectos negativos, hasta entonces no reconocidos o subestimados.

Primero fue John Williamson, festejado patrono del Consenso de Washington, quien algunos años atrás abogó por una “adaptación” de los principios formulados por el mismo en 1989: los modelos de liberalización deben tener “más cuidado con lo social, con la educación y con la creación de instituciones que aumenten la gobernabilidad de la economía”. Le siguió Michael Hammer, consagrado teórico de la llamada “reingeniería”, quien realizó un dolorido *mea culpa*: “no tomé suficientemente en

(*) Texto preparado para el panel de discusión “Proyectos de Desarrollo y Rediseño del Estado y de la Sociedad Civil”, parte integrante del seminario Tendencias de la Gestión Social, promovido por el Instituto de Estudos Especiais de la PUCB/SP-IBEAC-CENPEC, realizado en Sao Paulo, del 3 al 5 de noviembre de 1998. La versión original, en portugués, se encuentra en vías de publicación en el Brasil. Traducido del portugués por Carlos Sánchez.

consideración la dimensión humana”, declaró, reconociendo que son magros los resultados obtenidos por las empresas que, siguiendo su catecismo, se recortaron, adelgazaron, cesantearon y se reformatearon, empujando a millares de trabajadores al mercado del desempleo. “Si usted compite construyendo, tiene futuro. Si compite recortando, no lo tiene”, agregó Stephen Roach, el papa del *downsizing*, haciendo una clara concesión a un obvio criterio gerencial.

Reformadores anteriormente endiosados por los ejecutivos cortadores de cabezas tuvieron que reconocer que el adelgazamiento sin proyecto, reducido a la obtención de ganancias financieras o de racionalización de costos, no lleva a ningún lado. Tanto en el sector privado como en el sector público, sólo acarrió resultados cuestionables: diezma de los recursos humanos trabajosamente acumulados, corrosión de los vínculos de solidaridad en el interior de las empresas, generación de miedo e inseguridad entre los trabajadores, desgaste de sus sindicatos y de su vida asociativa.

El cuadro es deprimente: después de haber calado hasta el hueso, muchas empresas comienzan a darse cuenta de lo que dilapidaron, al prescindir de talentos y competencias hasta este entonces ignorados. La Asociación Americana de Administración, por ejemplo, descubrió que la mayor parte de las empresas que redujeron su tamaño desde 1990, tuvieron menos (o iguales) ganancias que antes, y no presentaron ninguna ganancia en productividad. No, no se trata de un discurso anticapitalista. Está todo en el New York Times de los primeros días de diciembre de 1996. De esa fecha hasta ahora, la situación no ha sufrido ningún cambio.

Las consecuencias negativas del reformismo neoliberal han generado reacciones sorprendentes. Reconocidos e insospechables intelectuales, como Lester Thurow, por ejemplo, comenzaron a afirmar que, al desmontar su Estado previsionario, el capitalismo estadounidense regresó al darwinismo social del siglo XIX, cuando se creía que sólo sobrevivirían “los más fuertes”, o sea los más capaces de responder a la dinámica del mercado y de vivir sin protecciones sociales o políticas compensatorias. Comenzaron a percibir que es preciso resistir, reaccionar, desencadenar alguna ofensiva; que los trabajadores, blanco principal de los ajustes neoliberales, deberían esforzarse por romper la cultura individualista introyectada en ellos a lo largo de la historia del capitalismo y recuperar con mayor plenitud los vínculos de solidaridad y el espíritu de lucha.

En fecha mucho más reciente (1998), John Stiglitz, vicepresidente del Banco Mundial, publicó en varias revistas especializadas un importante artículo en el que inclusive llega a utilizar una expresión inimaginable años atrás. El aboga por la necesidad de trabajar por un “consenso post-Washington”, en una clara alusión al agotamiento de la agenda hasta ese entonces prevaleciente y a la ostensible erosión de sus fundamentos. Stiglitz parte del reconocimiento de que las políticas derivadas del Consenso de Washington se orientaron hacia la estabilidad macroeconómica, la liberalización comercial y la correcta determinación de los precios, pero se mostraron “incompletas y en ocasiones equivocadas”, al no avanzar en términos de la comprensión del desarrollo económico y del funcionamiento del mercado. En último término, hacer que los mercados funcionen bien “exige más que una baja inflación; entre otras cosas, exige regulación fiscal, políticas para la competencia, políticas que faciliten la transmisión de tecnología y promuevan la transparencia”. Los propios objetivos del desarrollo necesitan ser revisados, de modo de ir más allá del mero crecimiento, e “incluir otras metas, tales como el desarrollo sustentable, el desarrollo equitativo y el desarrollo democrático”, así como buscar estrategias que sirvan para promover avances en todas estas metas simultáneamente.

Esto significa, de acuerdo con Stiglitz, que es preciso revisar el papel que el Consenso atribuía al Estado. Su premisa básica - la de que “los gobiernos son peores que los mercados” y que, por lo tanto, el mejor Estado es el menor Estado - mostró ser totalmente equivocada, al haber dado origen a una verdadera ola favorable a gobiernos mínimos. Un nuevo consenso debe partir de la premisa opuesta: “El Estado tiene un papel importante que desempeñar en la producción de regulaciones apropiadas, en la protección y en el bienestar social. La discusión no debería referirse a si el Estado debe o no

involucrarse, sino a cómo debe hacerlo. La cuestión central no puede ser, por lo tanto, el tamaño del gobierno, sino las actividades y los métodos del gobierno”.

Stiglitz, en suma, concluye que el Consenso de Washington preconizó la utilización de una pequeña serie de instrumentos para alcanzar una meta relativamente limitada: el crecimiento económico. No produjo mayores resultados positivos, ni sirvió para promover un desarrollo efectivo e integral. Una nueva agenda, ya emergente, debería ser rápidamente viabilizada. “El consenso post-Washington reconoce que es necesario tener un conjunto más amplio de instrumentos y, al mismo tiempo, que nuestros objetivos deben ser más amplios. Aspiramos a lograr incrementos en los niveles de vida - incluyendo mejor educación y salud - y no sólo aumentos en el PBI. Procuramos un desarrollo sustentable, que incluya la preservación de los recursos naturales y el mantenimiento de un medio ambiente saludable. Pretendemos alcanzar un desarrollo equitativo, que asegure que todos los grupos de la sociedad, y no sólo los de la cúspide, se beneficien de los frutos del desarrollo. Y procuramos un desarrollo democrático, para que todos los ciudadanos puedan participar por múltiples vías en las decisiones que afecten sus vidas”. Como si esto no fuese suficiente, un nuevo consenso “no podrá basarse en Washington”, pues si las políticas tienen que ser sustentables, “los países en desarrollo precisan reivindicar la propiedad de ellas”. No hay manera de cambiar el rumbo, concluye Stiglitz, sin “un mayor grado de humildad” y “sin reconocer que no tenemos todas las respuestas”¹.

Hoy se replantea, por consiguiente, por muchos canales a menudo inesperados, una tesis que frecuenta los ambientes democráticos y de izquierda desde hace ya un buen tiempo: el reformismo neoliberal no ofrece alternativa real a los problemas del capitalismo. Si bien es posible aceptar que el neoliberalismo consiguió “ajustar” el capitalismo y contener la hiperinflación, no hay forma de negar que ahora se ha tornado un peligro, amenazando con paralizar al enfermo y condenarlo a morir curado. Los escenarios más fácilmente percibidos no permiten visiones optimistas: el espectro de la crisis se agiganta por todas partes, produciendo turbulencias en el plano social y en lo individual, en el mercado y en el Estado, poniendo en peligro equilibrios y derechos. ¿Pueden las personas inteligentes cerrar sus ojos ante esto?

Desigualdad y desarrollo

En la actualidad, con cada día que pasa nos sentimos más instigados a reflexionar sobre un hecho incómodo y atemorizante: a pesar de los constantes avances tecnológicos, de los descubrimientos de la ciencia y de las conquistas productivas, la desigualdad se mantiene viva y operante. Desniveles brutales en la renta, en la escolaridad, la salud, la nutrición, y en las oportunidades, siguen separando a los hombres. Irrumpen donde antes había patrones inapreciables de equidad, penetrando por las grietas del orden social, cargados en hombros por los desempleados, desprotegidos e inmigrantes. Se cristalizan y se profundizan en forma inédita en países históricamente desnivelados y que desde hace décadas viven en la expectativa de iniciar una era de mayor justicia social. La desigualdad se extiende por cuenta de la reproducción exhaustiva del pasado, por efecto de las violencias de la revolución tecnológica, o como consecuencia de la combinación de olas del pasado y del futuro. Hoy, estrictamente, todos los países están expuestos al peligro. Sólo que para algunos, que se sumergen de un modo más “pasivo” en la globalización, el impacto es demoledor.

Hubo un tiempo, no muy lejano, en que se creía que la pobreza y la desigualdad representaban una especie de “sacrificio” inevitable: eran el precio que se pagaba por la construcción del “progreso”. Se pensaba que, con la expansión económica, paulatinamente, vendrían las soluciones para los males sociales. Que bastaría, por lo tanto, operar en términos macroeconómicos para que ocurriese la igualdad. Que, en esta medida, no sería necesario invertir en políticas sociales, ya que el progreso social seguiría automáticamente al desarrollo económico. Que era imposible partir la torta antes de que creciese. Que el desarrollo, como afirma Amartya Sen, sería un proceso inevitablemente cruel, inseparable de mucha “sangre, sudor y lágrimas”: no se separaría de una etapa en la cual ocurriría “una

importante restricción del bienestar en el corto plazo, a cambio de la obtención de recompensas mucho mayores en el futuro”².

La gran mayoría de los latinoamericanos sabe bien a lo que llevaron esas convicciones. Se perdieron años preciosos a la espera de un desarrollo que operaría milagros. La industrialización se aceleró y se convirtió en un factor determinante en muchos países, sin que se diesen pasos firmes en dirección al desarrollo social. América Latina no mejoró como hubiera debido en las áreas estratégicas, en la salud, en la vivienda y en la educación, sin hacer mención de la distribución de la renta.

Con el fin de las dictaduras y la recuperación generalizada de la vida democrática en el continente, cambió la sensibilidad de los gobiernos en relación con esta cuestión. Discursos, promesas e intenciones se hicieron más generosos. Se lograron importantes avances legales. A pesar de esto, el foso social siguió ensanchándose. Los gastos gubernamentales en materia social no aumentaron, escasos esfuerzos se realizaron para mejorar la calidad de la gestión de las políticas sociales, y casi nada se hizo para valorizar seriamente el “capital humano” de los distintos países. Y lo que es peor, la inoperancia de los gobiernos en esta área pasó a marchar de la mano con el desinterés de la sociedad, con la problematización de la solidaridad, con la incapacidad de la política para generar impulsos que responsabilizasen a las distintas instancias nacionales.

A las puertas de un nuevo siglo, por lo tanto, parece haberse intensificado la sensación de que la situación se encuentra más allá de los límites tolerables. Que algo tiene que hacerse con cierta urgencia, so pena de comprometer todo el futuro y de tornar el presente intolerable. Pese a encontrarse todavía circunscritas a círculos relativamente reducidos, algunas constataciones han comenzado a imponerse.

Primero: aún cuando sea verdad que el crecimiento económico no produce por sí solo el desarrollo social, también es innegable que las políticas y los ajustes macroeconómicos recesivos constituyen poderosas fuentes generadoras de pobreza y desigualdad. Cuanto más demoremos en dinamizar la economía, más tendremos que asistir a la profundización de las distancias sociales. Por otra parte, siempre es posible hacer algo por la inclusión, aún cuando no haya crecimiento.

Segundo: ya no es posible (si es que alguna vez lo fue) imaginar un crecimiento económico sustentable sin inversiones regulares, significativas y permanentes en el área social. La pobreza y la desigualdad deforman la economía, socavan su competitividad y debilitan sus mercados, llegando inclusive a bloquear el propio crecimiento. Por ello, la política económica no puede seguir siendo concebida a costa de la sociedad, como atributo de técnicos y funcionarios operacionales: ella debe tener un fuerte y claro contenido social.

Tercero: la firme adopción de políticas sociales específicamente orientadas hacia la disminución de la desigualdad genera estímulos formidables en los distintos niveles de la sociedad. Su contribución con la economía, por ejemplo, es notable, tanto en términos de aumento de la eficiencia de los trabajadores como en términos de estabilidad. Sin una disminución de la desigualdad y de la exclusión, entre otras cosas, la política y la democracia se encuentran permanentemente amenazadas, la cultura tiende a la elitización o es absorbida por los *media* y se desnaturaliza, y así sucesivamente.

El reconocimiento de estos tres puntos, entre otros, está actualmente en el centro de las preocupaciones de numerosos intelectuales³, se incorpora en las agendas de gobiernos, de ONGs y de partidos democráticos, y se convirtió en una recomendación explícita de importantes agencias internacionales de fomento como el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Nunca se había reunido tanto apoyo para un causa tan noble. El problema está en que el fin del siglo se halla cubierto por una lógica “ciega” e irracional, que retira el protagonismo del Estado, genera muchos egoísmos, esparce confusión y escepticismo. Pese a todo, no deja de ser un motivo de esperanza el percibir que el campo de batalla está delimitado, y que, en este campo, pequeñas victorias tienen repercusiones de incalculable impacto.

Las varias caras del problema

Toda esta movilización trae consigo un conjunto de problemas e interrogantes respecto al Estado y a la sociedad civil, condicionando en buena medida la discusión con respecto a los proyectos de reforma y de rediseño del Estado. ¿Qué papeles y atribuciones deben reservarse para el Estado en el nuevo cuadro histórico social que se anuncia? ¿Cómo debe estructurarse el Estado, sobre todo cuando es percibido en la dimensión gubernamental y administrativa más inmediata? ¿Qué lugar debe ocupar la sociedad civil en la reorganización de las sociedades contemporáneas, en la conformación de los modos de convivencia y en las funciones de gobierno y de gerencia? Pero ¿respecto a qué sociedad civil es preciso interrogarse? ¿De un espacio para la explicitación de subjetividades políticas o de un espacio para la afirmación de intereses escasamente comunicantes, egoístas o corporativos?

Se trata de un cuadro que nos impulsa hacia alternativas claramente delineadas. ¿Deseamos un Estado para viabilizar el mercado o para ofrecer parámetros a partir de los cuales sea posible una convivencia dignificante, justa e igualitaria? ¿Cómo transformar demandas e intereses particulares, que crecen y se multiplican incesantemente, en energía generadora de “interés general”? O, lo que es lo mismo, ¿cómo posibilitar la libre manifestación de los particularismos sin que se vea amenazado el vivir colectivo, sin que se hunda en un proceso de destrucción recíproca? Dependiendo de la respuesta que imaginemos para cuestiones como éstas, podremos percibir las limitaciones y las virtudes de los proyectos que actualmente impulsan la orientación de la reforma del Estado. Si quisiéramos un Estado para proteger el mercado y asignar recursos, podemos pensar en rediseñarlo a partir de una óptica predominantemente “gerencial”, más centrada en los costos del Estado y en las “cantidades” en él agregadas (recursos financieros, humanos, organizacionales). Si, por el contrario, deseásemos un Estado para dignificar la vida colectiva - un Estado para la sociedad civil -, no tendremos cómo dejar de pensar en una reforma de naturaleza cualitativa, democrática, fuertemente centrada en las finalidades y en el sentido del Estado. Estamos hoy, por consiguiente, en medio de una disputa entre dos patrones reformadores, cada uno de los cuales trae consigo un sello de identidad y una idea de futuro.

Cuando pensamos en el rediseño del Estado, nos encontramos ante un problema multifacético. No podemos, por ejemplo, desestimar la faceta gerencial de la crisis actual. Ella apunta hacia el desempeño más propiamente administrativo del Estado, y sugiere claramente que algunas de las dificultades presentes pueden ser enfrentadas con lo que se acostumbra llamar “tecnologías de gerencia”, algo que se refiere al incremento de habilidades y conocimientos técnicos con los cuales se puede mejorar el desempeño del aparato público. Pero el problema del Estado también tiene una faceta más específicamente referida a sus estructuras, al patrón organizacional y a la cultura que tipifica sus instituciones. En esta dimensión, el rediseño del Estado implica la propuesta de nuevos patrones de organización, funcionamiento y operación, previendo también la implementación de distintos programas de formación y capacitación, con los cuales se piensa avanzar en términos de nuevas mentalidades y nuevos comportamientos. Existe, además, una dimensión constitucional, referida directamente al marco jurídico y normativo más amplio, algo que se traduce en la revisión o reforma de la Constitución. Y existe, por último, una faceta inmediatamente política, vinculada a las capacidades societales, a las filosofías y a los estilos de gobierno, a las relaciones Estado/sociedad, a los valores públicos y democráticos, al sentido de la política y de sus instituciones, entre las cuales se encuentra el Estado.

En gran medida, la naturaleza polifacética del problema tiene que ver con la naturaleza multifacética de la crisis contemporánea. Por más que debemos dar la debida importancia a las dimensiones fiscales, financieras y administrativas de la crisis del Estado, no tenemos cómo evitar el reconocimiento de que esta crisis es esencialmente política. Ella no es el resultado pasivo de una globalización que transcurre como si fuese una fuerza de la naturaleza, ni fruto de designios misteriosos de la economía o de la dinámica insaciablemente exigente de nuestras sociedades. Se trata

de una crisis que tiene que ver con opciones políticas, con proyectos de hegemonía y de dominación, con políticas concretas de gobierno, que no supieron evitar la superposición de varios desafíos, no supieron ecuacionar el cambio estructural de este fin de siglo, y que facilitaron la generalización de problemas que se creían debidamente resueltos. El desempleo, en este caso, como es fácil de percibir, ocupa un lugar destacado: se deriva de la incapacidad gubernamental y societal de realizar las operaciones acertadas ante la virulencia de la revolución tecnológica y de la reorganización global de la economía. No se trata de una fatalidad ⁴. Lo mismo vale para el cuadro de despolitización y el individualismo adquisitivo en que nos encontramos: no proviene de un “defecto” de la humanidad oculta de los hombres, sino de “fallas” políticas asociadas en parte a ciertos errores de las fuerzas políticas democráticas, y en parte y, sobre todo, a la afirmación de un proyecto de hegemonía y de dominación que claramente incentiva la subestimación y la desvalorización de la política, la mercantilización de la vida, la difusión de una ideología de no pertenencia a comunidades mayores, de “soledad”. Se trata de un cuadro que promueve los componentes más perversos de la complejidad social contemporánea: incertidumbre, sensación de que se vive en medio de procesos que no se controlan y que transcurren a grandes velocidades, en un ambiente que propicia la producción, la difusión y el intercambio de informaciones, que fragmenta grupos e intereses, que estimula pero que paradójicamente dificulta la coordinación, que amplifica los efectos de la pobreza y de la exclusión, que llega casi a prohibir a las instituciones políticas que procesen las demandas de una sociedad siempre más explosiva y exigente. Se trata, en suma, de un cuadro que, por todos estos factores, sustrae mucho de la capacidad societal para proyectar futuros, planear destinos y vivir utopías.

El proyecto democrático se encuentra así ante una situación complicada. Si, por una parte, aumenta con firmeza su viabilidad - gracias a los incentivos provenientes de la mayor movilidad social, del proceso objetivo de democratización de las informaciones y de la ruptura de jerarquías y autoridades -, por otra parte repite algunos mecanismos y factores que bloquean e impiden su plena realización.

Bloqueos e impedimentos

Las dimensiones centrales del proyecto democrático están siendo hoy, simultáneamente, estimuladas por la vida contemporánea e imposibilitadas de ser puestas en práctica. Existe una situación objetiva (material y espiritualmente hablando) que las amarra y las traba. No se trata sólo de reconocer la contraposición que Norberto Bobbio descubrió que existe entre los nobles y elevados ideales democráticos y la “materia bruta” que impregna la democracia real ⁵. Se trata de esto, pero también de algo más.

¿Qué es lo que prevé el **proyecto democrático**? Yendo más allá de las determinaciones liberales de la democracia, e incorporando por lo tanto toda la amplia gama de contribuciones aportadas por la izquierda al proyecto democrático - perspectiva que nos permitiría entender el valor universal de la democracia -, podemos admitir que se trata de un proyecto destinado a hacer viable el gobierno del pueblo (la soberanía popular) a partir de reglas válidas para todos. Reglas que se afirman y funcionan ya sea en el plano de la representación, ya sea en el plano de la participación política, que tienen que ver con el voto (elección) y con la decisión (gobierno), con los derechos políticos, civiles y sociales, con la educación para la ciudadanía, con la transparencia y la visibilidad. Se trata, así, precisamente por la grandeza de sus propósitos, de un proyecto que sólo encuentra viabilidad plena cuando es “impuesto” y defendido por la sociedad organizada.

Sucedo que la propia transición hacia el capitalismo global bloquea el proyecto democrático, a pesar de estar creando siempre más condiciones para su viabilización. Pienso aquí no en la mundialización de la vida, de los intercambios o de las relaciones entre las personas, sino en el ambiente de endiosamiento del mercado y de la mercantilización en que nos encontramos. Nos estamos reduciendo a ser ciudadanos que operan como sujetos que sólo parecen confrontar necesidades

económicas, consumidores que frecuentan pasivamente un imaginario social “desencantado”, una vida informacionalizada e invadida por la tecnología y por la ciencia. Un ambiente que, casi por sí solo, impone una fuerte homologación liberal-democrática.

En este nuevo patrón de vida social, queda problematizado todo el campo de la subjetividad. Existe una suerte de tendencia a que se haga más difícil el contacto inteligente con el tema del cambio y de la dirección del cambio. Se da una especie de dilución socialmente necesaria de la capacidad de proyectar, base a partir de la cual podemos entender la situación de crisis política y cultural que acompaña la fase de transición en que nos encontramos. No existen tampoco muchas condiciones para que el proyecto democrático permanezca inquebrantable.

El proyecto democrático, pese a todo, está bloqueado pero no desactivado. Se repone día a día, y cada día impone retrocesos a la hegemonía liberal. No a través de la celebración abstracta de valores superiores (libertad, igualdad, justicia social), sino de innumerables actos cotidianos de contestación, de “desobediencia”, de ruptura de jerarquías autoritarias, de conquista de nuevos espacios de organización, de repudio a injusticias y atrocidades. Pero su plena reactivación depende, en gran medida, de la posibilidad de retomar la política - una movilización que sea capaz de reinventar la política como práctica y como proyecto. Que sea capaz de ir más allá de la política de los políticos, planteándose ante la vida misma de las personas, de modo de ayudarlas a responder a las necesidades y a los valores socialmente instituidos, así como a crear un “sentido común” para la vida. Algo, en suma, que reponga el “hacer política” como una actividad dedicada a “ocuparse de las cuestiones fundamentales, no para darles respuestas definitivas, sino para que no podamos dejar de preguntarnos quiénes somos, por qué estamos juntos, y qué objetivo queremos alcanzar”⁶.

Retomar la política significa también alcanzar una nueva idea de desarrollo, alejada del patrón depredatorio, mercantil y monetarista en que todavía nos encontramos. Significa, asimismo, restaurar el pensamiento crítico y creativo, de modo de poder ir “más allá del nivel de análisis de los fenómenos económicos” y hacer posible una lectura de la crisis del Estado social no como “crisis de gobernabilidad o crisis fiscal”, sino como crisis del propio paradigma que percibe el desarrollo económico como “dimensión absorbente de la política y de la vida social”⁷.

Retomar la política significa, por lo tanto, explorar las posibilidades que tiene la política de auxiliar a los hombres a intentar lo imposible para, con esto, acumular fuerzas para realizar lo posible e ir más allá. Exactamente por esto, retomar la política significa reformar el Estado: concebir una nueva sociedad y un nuevo conjunto de articulaciones entre economía y política, Estado y sociedad civil, instituciones, grupos e individuos, yendo más allá de las (y dándole un sentido a las) operaciones dedicadas a ajustar y a desvalorizar a los gobiernos y a los aparatos administrativos⁸.

Rediseño del Estado y sociedad civil

Es en el campo del proyecto democrático de reforma del Estado que se plantea efectivamente la cuestión de la sociedad civil. Fuera de allí, ella no tiene mucho sentido, o lo que es lo mismo, tiene un sentido estrecho y limitado. Esto quiere decir que necesitamos adoptar una perspectiva que no sólo valore la sociedad civil y celebre su creciente protagonismo, sino que también colabore para politizar la sociedad civil, liberándola de las amarras reduccionistas y represivas de los intereses particulares, aproximándola al universo más rico y generoso de los intereses generales, de la hegemonía, vale decir, del Estado.

Digo esto porque me parece posible constatar que vivimos hoy asediados por una seducción: la de que, ante las “falencias” de la política, de la falta de desprendimiento y de la inoperancia de los políticos, todo mejoraría si apostásemos a la activación de la pureza asociativa de los movimientos sociales y de las formas más espontáneas o “naturales” de expresión de la vida comunitaria. El activismo civil funcionaría, así, como una especie de fuente generadora de energía, con la cual se neutralizarían las maldades del sistema político. Por detrás de todo esto se despliega una visión

dicotómica de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, que en lugar de ser vistas como estructuradas por una dialéctica de unidad y distinción, como diría, entre otros, Gramsci, adoptarían la imagen de una disyunción, de una separación, de una ausencia de comunicación. Se sataniza el espacio político para dar libre curso a una hipotética naturaleza virtuosa de la sociedad civil ⁹.

Pero la sociedad civil que emerge de esta visión es una sociedad civil despolitizada: no es un espacio de organización de subjetividades, en el cual se puede dar la superación de la política de los intereses económico-corporativos, o en otros términos, el pasaje de los intereses del plano “egoísta” hacia el plano “ético-político” (Gramsci) - pasaje éste que, a su vez, deriva de la configuración de los grupos sociales como sujetos de pensamiento, voluntad y acción, capacitados para universalizarse, salir de sí, candidatearse para la dirección y la dominación. Concebida sin lazos orgánicos con el Estado, la sociedad civil no consigue aparecer como el terreno en el cual los grupos luchan por la hegemonía (o si se quiere, que las “luchas de clases” se realicen en un nivel superior), vale decir, por la posibilidad de imprimir al conjunto de los hombres una nueva forma de consenso y de consentimiento. No se plantea, por lo tanto, como aquel ámbito societal que surge como el *locus* en el que se organiza la subjetividad y se da el choque de hegemonías ideológicas, ámbito que expresa una economía dada y que es parte integrante del proceso global de producción/reproducción de las relaciones de clase. Gramsci diría que los sujetos sociales se candidatean para la dominación y la hegemonía en la medida en que “se tornan Estado”. Sin Estado (sin un vínculo con el Estado y sin una perspectiva de Estado) no hay sociedad civil digna de atención: sin Estado no puede haber hegemonía.

La sociedad civil no es inmediatamente política. La sociedad civil es el mundo de las organizaciones, de los particularismos, de la defensa muchas veces egoísta y encarnizada de intereses parciales. Su dimensión política requiere ser construida. Es mediante la activación política que la sociedad civil se vincula al espacio público democrático. La politización de la sociedad civil, por lo tanto, resulta de luchas, de la evidenciación de identidades, proyectos y perspectivas que chocan y compiten entre sí. Y es sólo esta sociedad civil politizada la que se muestra capacitada para funcionar como la base de otro proyecto de hegemonía, como base de una oposición efectivamente libertadora, popular y democrática, ante las estrategias de dominación referenciadas por el gran capital. Solamente esta sociedad civil puede vislumbrarse como plataforma para que se rediseñe democráticamente el Estado, vale decir, para que se avance rumbo a una reforma cualitativa y sustantiva del Estado.

No estamos aquí, por consiguiente, ante un tema “académico”, vacío de implicaciones o desdoblamiento operacionales. La comprensión de la dialéctica Estado-sociedad civil y la asimilación de un concepto riguroso de sociedad civil no son importantes sólo para que nos hagamos teóricamente más aptos para entender el mundo en que vivimos, sino que también son decisivos para que comprendamos el sentido mismo de la reforma del Estado que hoy se encuentra en pleno curso.

A lo largo del proceso de objetivación y reproducción del capitalismo, la sociedad civil cobró cuerpo sobre la base de una modernización que se caracterizó por afirmar de modo muy agresivo una multiplicidad de intereses particulares, con lo que se generalizaban innumerables “agregaciones inferiores”, contrapuestas a agregaciones de naturaleza más propiamente política y asociadas (aunque, de una forma incompleta) a la vertiente “participativa” de la democracia ¹⁰. En el caso específico del Brasil - que creo que es similar a la situación que se da en gran parte de América Latina -, por ejemplo, este proceso conoció su fase más fuerte en íntima conexión con una larga dictadura política, en los años sesenta y setenta, e inclusive en buena parte de los años ochenta. El asociacionismo “inferior” coincidió, así, tanto con una atrofia autoritaria del campo de la política como con el mal funcionamiento de las instituciones básicas de la representación política, que no pudieron evolucionar al mismo ritmo de evolución económico-social. Es decir que nosotros nos hicimos modernos en el plano de la economía y de la sociedad, en el plano de los valores y de la movilización social, sin lograr modernizar la instituciones políticas de la representación.

La sociedad civil que creció con base en este proceso se vio confrontada con los más diversos estímulos tendientes a separarla de la política, a entregarla a valores más individualistas que solidarios, más competitivos que cooperativos. El conjunto de los cambios impactó comportamientos y expectativas políticas, forzó la apertura de espacios para la vocalización de nuevos intereses, transformó los patrones de participación y de competencia electoral. En combinación con la progresiva e irrefrenable universalización de los derechos sociales - con la incorporación de nuevos contingentes poblacionales al sistema de los servicios públicos -, este hecho trajo consigo enormes desafíos para el Estado, problematizando especialmente el desempeño gubernamental y la eficacia/eficiencia de la administración pública. En cierto sentido, y de manera paradójica, todo esto acabó por trabar la educación política de la ciudadanía y la politización de la sociedad civil. Se redujo, así, la capacidad del sistema político y de la propia movilización social para producir consensos, “agregaciones superiores”, interés general. El propio aparato estatal asistió al progresivo debilitamiento de su papel como regulador, despojándose de la posibilidad de procesar demandas y de colocarse como agente estimulador de las condiciones para la afirmación de una comunidad política.

Para decirlo de otro modo, las sociedades latinoamericanas se modernizaron sin modificar el patrón de nuestro desarrollo histórico; vale decir, de modo más “pasivo” que activo, menos por la imposición categórica de un protagonismo de masas calificado para promover rupturas más radicales, que por la prolongación del pasado y por la conciliación entre los poderosos. El cambio se hizo sin que se eliminasen prácticas, estructuras y relaciones típicas de fases anteriores de la vida societal, que acabaron por esta vía siendo incorporadas “funcionalmente” como factores de reproducción del orden. Distintos países - el Brasil se encuentra nuevamente aquí, como un ejemplo - siguieron amarrados a la modernización conservadora con la que fueron construidas las historias nacionales del continente: entrando en contacto con los varios frutos modernos - nuevos seres sociales, nuevos sujetos políticos, diferenciación, individualización - pero sin conocer la materialización de un ordenamiento político incorporador (efectivamente democrático y republicano, si se prefiere).

Nos fuimos haciendo modernos sin que se hubiesen organizado sistemas de representación de intereses dotados de vigor político, poder de absorción y capacidad de procesamiento de demandas y presiones. En lugar de imponerse a los intereses privados, el poder público se redujo a ser objeto de esos intereses. Además de selectiva y excluyente, esta siempre fue una situación eminentemente ambigua, ya que los mismos intereses que se fueron apropiando del mundo público (para el caso, sobre todo del mundo estatal), se mostraron enteramente dependientes de éste: sólo pudieron ganar vitalidad y proyección por medio del Estado. De donde la vocación del capitalismo latinoamericano para adoptar soluciones autoritarias y represivas como base para la obtención del consentimiento y la obediencia. Sea como fuese, el hecho es que de los años sesenta en adelante, en particular en el Brasil, al mismo tiempo que se fortalecía el orden estatal y se diferenciaba el orden societal, aumentaban las asincronías entre el Estado y la sociedad, produciéndose una especie de dilución del carácter público del poder. De allí el problema que parece permear toda la América Latina: cuanto más se modernizaron las sociedades, más tendieron a profundizar el foso que las apartaría del Estado. La pujanza “anárquica” de la diferenciación societal se mostraría más fuerte que las posibilidades de constitución de un efectivo espacio público, o sea de un espacio ocupado por la sociedad civil y regulado por el Estado.

Como consecuencia, la complejidad inherente a la modernización acabó por encontrarse con las complicadas prolongaciones del “atraso” histórico. Las robustas sociedades civiles nacidas de la transfiguración societal quedaron, así, recortadas por una complicada síntesis de modernidad, autoritarismo y miseria. Esto, por sí solo, redujo el ímpetu y la regularidad de las acciones típicas de la sociedad civil. Pero, peor que eso, ellas se vieron todavía más perjudicadas por los problemas que se manifestaron en el plano de su articulación con la política. Se ensancharía, así, el foso entre la sociedad civil y la “sociedad política”, entre el Estado y los individuos organizados, foso que pasaría a comprometer simultáneamente la organización/selección de la demanda social y la calificación de las

respuestas gubernamentales. Pero todavía más: en las fallas de sintonía, la sociedad civil quedará sometida a la fragmentación y al corporativismo: el asociacionismo se expandiría rápida y vigorosamente, haciéndose portavoz de una creciente pauta de reivindicaciones, pero no pondrá en jaque los arreglos hegemónicos. No se politizará, dejando de funcionar de modo regular y eficaz, como contrapeso del Estado.

La antigua forma del Estado no se modificará de manera sustantiva, sino sólo en su aspecto más inmediatamente patrimonial y funcional, gracias a las políticas de ajuste y de privatización, que se generalizaron en el continente. El innegable avance en el sentido de la democracia política registrado a lo largo de los años ochenta y noventa, encontró su límite en la precaria politización de la sociedad, en la dificultad que tuvieron sus sectores más movilizadas para pasar de la reivindicación económico-corporativa hacia el plano de la política estatal, tendiendo un puente entre la sociedad civil y el Estado. La sociedad civil vio, así, tornarse su fuerza más potencial que efectiva, no consiguiendo dar origen a ningún dinamismo consecuente y de larga duración.

Pero existe un segundo elemento que también ayuda a explicar este problema de la disyunción entre política y sociedad civil. Es que nosotros nos volvimos modernos y globales casi simultáneamente. Nos fuimos modernizando al tiempo que nos fuimos globalizando. Quiero decir con esto que fuimos condicionados, en primer lugar, por la nueva fase de ordenamiento de las relaciones internacionales y de organización del mundo, que se identifica con la afirmación de una hegemonía, la hegemonía del neoliberalismo, con su individualismo agresivo, su énfasis en el mercado y en la minimización de la presencia del Estado. En segundo lugar, vimos reducirse las bases de la soberanía, teniendo que asistir a una sensible disminución de la supremacía estatal *vis-à-vis* en el exterior y en el interior, con los individuos siendo proyectados como ciudadanos de un Estado que ya no logra imponerse sobre su propio territorio ni sobre los hombres y mujeres que en él conviven. En tercer lugar, nos globalizamos en el sentido de que fuimos alcanzados por el proceso de difusión de informaciones en una escala inédita, pasando a integrar una verdadera “aldea global” donde se opera en “tiempo real”, en la cual las informaciones circulan a una velocidad extraordinaria y entran en todas partes sin pedir permiso.

La reunión de estas tres vertientes constitutivas del proceso de globalización - crisis de la soberanía, reiteración de la cultura individualista e informacionalización de la vida - están generando en nuestros días, en el mundo todo, una especie de “falencia” de los institutos clásicos de la política. Las trampas del “ciberespacio” y de las estructuras mediáticas nos hace resbalar: ya no sabemos más cómo organizar los consensos y ya no poseemos más ciudadanos capacitados para reflexionar, ponderar y calcular con base en diseños razonables de futuro. La sociedad civil terminó, así, por entregarse a los intereses particulares más inmediatos que en ella conviven de modo competitivo, no dejándose alcanzar por ningún proyecto “general”: permaneció de espaldas a la política, incapacitándose para producir consensos o crear hegemonías. Con esto, la propia democracia tiende a fluctuar, a ubicarse por encima de la sociedad, a afirmarse sólo como un valor abstracto. El espacio de la política, a su vez, se convirtió en un espacio de la política como espectáculo. Vale decir, más imágenes, menos “hechos”, menos ideas, menos opiniones sustantivas, menos protagonistas organizados. Las disputas electorales pasaron a hacerse mucho más con base en este juego de imágenes e informaciones que con base en la confrontación de opciones activadas por organizaciones políticas vinculadas a la sociedad civil. Se estrecharon así los lugares en que hubiera sido posible afirmar identidades colectivas y utopías, factores con los cuales proyectar el futuro.

Fue, por consiguiente, en gran medida inevitable que nos encontrásemos con una separación entre lenguaje del Estado y lenguaje societal. Acabamos, en cierto modo, por quedar entre dos mundos que sólo se comunican con dificultad y que casi siempre compiten ente sí. El sistema dominante (y por medio de él, distintos sectores de los aparatos del Estado) trata a la sociedad civil como pura (e inconveniente) fuente generadora de problemas para la gobernabilidad, o como expediente con el que

se cuenta para intentar aliviar los costos del Estado. La sociedad civil, por otra parte, se percibe como víctima de un Estado que todo lo exige y que poco consigue producir, responsabilizándolo por todos sus infortunios y por todo aquello que deja de hacer para atender las distintas carencias o, lo que es peor, por todo aquello que hace para ampliarlas. Pero no se trata de una sociedad que se proclamaría con vocación para autogobernarse: victimizada por el Estado por una parte, ella se presenta, por otra parte, como una especie de niño indefenso incapaz de sobrevivir sin la tutela y la protección del Estado. Se desea “menos” Estado para ciertas cosas, pero mucho “más” Estado para otras cosas. Todo depende del grupo que demanda, de la naturaleza de las reivindicaciones, de los intereses en juego. Como telón de fondo, una enorme dificultad para arribar a consensos.

En una situación en la cual se profundizan y se congelan tales oposiciones entre sociedad civil y Estado, ¿qué tipo de consecuencias se produce? En primer lugar, diría que aumentan las posibilidades de que se generalice categóricamente la idea de una sociedad civil “sin Estado”, vale decir salvaje, desprovista de formas de mediación, que se representa a sí misma todo el tiempo, y que por lo tanto nunca se representa de hecho, en la cual los intereses particulares, librados a su suerte, combaten unos con otros por motivos no muy nobles; un espacio en el que imperaría la ley del más fuerte y donde los intereses de los más fuertes se afirmarían ante los intereses de los más débiles. Con lo que quedaría imposibilitada la resolución del problema de saber quién organiza a los desorganizados y dirige la sociedad civil, o sea, quién direcciona los intereses hacia nuevas formas de equilibrio o de compensación. En suma, en esta imagen salvaje, permanece sin saberse qué instancia reuniría las condiciones para “obligar” a los diversos intereses particulares, afirmados siempre de modo imperial y agresivo, a integrar una comunidad política que los igualaría y equilibraría. También queda sin condiciones para ser resuelto el problema de saber quién “protege” los intereses de los más débiles o garantiza las conquistas sociales acumuladas a lo largo del tiempo. En el límite, por consiguiente, en un escenario en el cual Estado y sociedad civil son mundos separados, se torna extremadamente difícil la afirmación política de la sociedad civil, es decir, la afirmación de nuevas hegemonías.

En segundo lugar, aumentan también las posibilidades de que se materialice un “Estado sin sociedad civil”, o sea un Estado omnipotentemente concentrado en sus poderes ejecutivos, vacío de política, racionalmente gerencial, concebido a lo más como defensor de una democracia minimalista y de una sociedad civil capacitada para firmar “sociedades” o actuar en procesos de “descentralización participativa” meramente protocolares.

Perspectivas para el futuro

¿Qué podemos esperar si estas tendencias cristalizasen o se mostrasen duraderas? Ante todo, estaría dada la prolongación de una hegemonía que actualmente no sólo disfruta de un ambiente sociocultural favorable, sino que además encuentra eco en las más diversas esferas societales, incluyendo entre ellas a las más directamente políticas y gubernamentales. En segundo lugar, tenderían a agravarse las conocidas dificultades para el protagonismo político de la izquierda. No sólo en el sentido de la inviabilización de eventuales proyectos puntuales o de corto plazo destinados a concertar algunas alianzas electorales, sino, sobre todo, en el sentido de una inviabilización más profunda, derivada precisamente de un fraccionamiento que se consolidaría en el propio seno de la izquierda: una “izquierda de Estado” - pragmática, responsable, moderada, pero más liberal-demócrata que socialdemócrata - irremediamente opuesta a una “izquierda societal”, más espontánea e intransigente, más sensible a las demandas sociales pero incapaz de ubicarse como agente totalizador y de universalizarse. Con lo que resultaría aún más difícil, para la izquierda, la posibilidad de adherirse a la sociedad civil y “hacerse Estado”.

No tendríamos, entonces, muchas posibilidades de poner en marcha una operación destinada a reinventar la política. Me refiero aquí no sólo al trabajo de reforma de las instituciones, sino especialmente al trabajo de introyección de nuevas perspectivas, nuevos valores y nuevos protagonistas

en el campo de la política, en cuyo reduccionismo encontraríamos sólo dos tipos de estímulos. Por una parte, el estímulo a la reiteración de reacciones moralizantes ante la política, con los ciudadanos tendiendo a tratar a sus políticos no como representantes sino como adversarios, seres sospechosos por definición. Por otra parte, el estímulo a nuevas oposiciones entre Estado y sociedad civil, con la consiguiente prolongación de la depreciación y la banalización de la política.

Pero aquí también nos encontramos en un campo de alternativas y opciones, en el que se entrecruzan subjetividades y estructuras. No tendría sentido, por eso, aislar el “pesimismo”, cargar las tintas oscuras del presente, temer los varios productos y subproductos de la crisis de nuestros días, y dejar en un plano secundario la señalización de las salidas, sin entrever que aun en lo “peor” del presente hay elementos de activación de lo nuevo. No basta sólo con repeler el presente: es preciso sumar a la crítica del presente una propuesta de futuro, entender en qué medida y por qué motivos el presente prepara el futuro, delinear qué futuros posibles tenemos ante nosotros y cuáles son los caminos que se nos ofrecen para que los alcancemos.

Hoy, cuando el mundo se inclina ante una grave ausencia de perspectivas y una aguda crisis de referencias, debemos empeñarnos sinceramente para mirar más adelante. No es aceptable que nos entreguemos al diagnóstico de una “crisis que empeora siempre más”, que es mortífera en su magnitud y sus alcances, que nos sofoca y nos impide vislumbrar cualquier salida. No basta con denunciar a los “inculpados” por los males del presente, sean ellos gobernantes, clases, intereses o megatendencias. No basta con acumular datos que comprueben que hoy estamos peor que ayer, que denuncien retrocesos y victimizaciones amorales, o que relativicen la euforia de los noveleros. Es preciso ir más allá. Es preciso extraer del presente los elementos que anuncian lo nuevo, que condensan lo mejor de lo que hacemos y que por eso mismo pueden sustentar un proyecto razonable de futuro. A pesar de todo y en medio de terribles conflictos y contradicciones, la humanidad sigue viva, conquistando nuevas posibilidades en todo momento, rompiendo límites históricos que hasta entonces bloqueaban la autodeterminación, la libertad, la inteligencia, la creatividad, el diálogo de todos con todos.

Me parece indispensable pensar en términos “heterodoxos”. Si el Estado pasó a confrontar dificultades en su desempeño, es inevitable que se proyecte una situación en la cual los espacios sociales requieren ser radicalmente valorizados. Todo lleva a creer que el Estado no podrá volver a desempeñar los mismos papeles que desempeñó antes, pero al mismo tiempo no es razonable imaginar que los intereses modernos que quieren postularse como rectores puedan prescindir por completo del Estado. No tiene sentido oponer al “exceso de Estado” una lógica “sociólatra”, basada en la valorización unilateral de los movimientos sociales, de los nuevos tipos de asociacionismo, de las organizaciones no gubernamentales, del “tercer sector”, de la defensa algo anárquica de los procesos de descentralización, de las “justicias emergentes”, y así sucesivamente. Se trata de una especie de apología de la sociedad civil vacía de consecuencias positivas, sobre todo porque es hecha a partir de la contraposición dicotómica y maniqueísta de la sociedad civil y el Estado: una, el reino del Bien; el otro, la encarnación de todo el Mal.

Esta es la cuestión que está en la base misma de la discusión con respecto a las relaciones entre Estado y sociedad civil y, más específicamente, del problema de la dirección política: el problema, en suma, de concebir un proceso de reposición de sujetos, o de emergencia de nuevos sujetos, en el cual se pueda enfrentar el actual cuadro de desgarramiento, fragmentación y complejidad, en el cual, entre otras cosas, resulta difícil pensar la política, pensar estratégicamente, pensar en el largo plazo. Es cosa bien sabida que el análisis político de corto plazo sólo tiene sentido si contiene el de largo plazo. Pero, si el largo plazo está vetado, y está vetado porque no se tiene un diseño de futuro, no se tiene una utopía, ¿qué hacer? ¿Cómo elaborar ideas orientadas a incidir en la vida práctica, convirtiéndose ellas mismas en “fuerzas materiales”?

Nunca antes se habían reunido, como lo han hecho ahora, tantas condiciones para una construcción inteligente del futuro. Este es el gran producto de la fase de mundialización radical del

mundo en que nos encontramos: de la desterritorialización, del avance tecnológico y científico, de las posibilidades de producción material, del salto gigantesco en términos de comunicación y acceso a informaciones, del surgimiento de nuevos espacios de intercambio y de convivencia, del aumento de las posibilidades para la fundación de una democracia de nuevo tipo. El mundo se desprovincializa a ojos vista, pierde los vínculos estrechos con el territorio, se abren verdaderas grietas en las antiguas soberanías, en las viejas estructuras y en la viejas instituciones, vale decir, en todo aquello con lo que se construyó el progreso en el pasado (pero con lo que también se viabilizaron tantos horrores). El futuro no está claro, pero está muy al alcance de la mano.

Notas

¹ Joseph E. Stiglitz, “Más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo. Hacia el consenso post-Washington”. Desarrollo Económico, IDES, vol. 38, no. 151, octubre-diciembre de 1998, pp. 691-722.

Citas extraídas de las pp. 691, 712, 717 y 720-21.

² Amartya Sen, “Reflexiones acerca del desarrollo a comienzos del siglo XXI”. Documento presentado en la Conferencia sobre “Teoría y Práctica del Desarrollo”. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., 3-5 de septiembre de 1996.

³ Entre la amplia literatura existente al respecto, remito a Bernardo Kliksberg, O Desafio da Exclusão: para uma gestão social eficiente. Sao Paulo: Fundap. 1997.

⁴ Una presentación rápida y estimulante de esta perspectiva que percibe los problemas sociales como resultantes de escogencias políticas, no de fatalidades económicas, puede encontrarse en Jacques Génereux, O Horror Político: o horror não é econômico. Traducción Eloá Jacobina. Río de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

⁵ Contraposición presentada en particular en O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Traducción Marco Aurélio Nogueira, Sao Paulo: Paz e Terra, 1986.

⁶ Pietro Barcellona, Política e passioni: proposte per un dibattito. Torino: Bollati Boringhieri, 1997, p. 117.

⁷ Idem, ibidem, p. 111.

⁸ Para un tratamiento más profundo de esta posición, ver Marco Aurélio Nogueira, As possibilidades da política: idéias para a reforma democrática do Estado. Sao Paulo: Paz e Terra, 1998.

⁹ Discutí en forma más detallada este aspecto en el capítulo “A sociedade civil contra política?” de As possibilidades da política, op cit.

¹⁰ “Inferiores” en el sentido de que tales agregaciones, asentándose sobre la solidaridad de intereses específicos y siendo en general fiscalizadas por el Estado (teniendo en vista el establecimiento de vínculos recíprocos de penetración y control), no están destinadas a fundar nuevas concepciones del mundo o nuevos programas para la sociedad.